

REPÚBLICA DE COLOMBIA



**RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO TREINTA Y OCHO CIVIL DEL CIRCUITO**

Bogotá D. C., veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

PROCESO No.: 110013103038-**2022-00384** -00
ACCIONANTE: EDGAR AUGUSTO MORENO GARCÍA
ACCIONADO: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE
PENSIONES – COLPENSIONES

ACCIÓN DE TUTELA -PRIMERA INSTANCIA

Procede el Despacho a decidir la acción de tutela instaurada por el señor EDGAR AUGUSTO MORENO GARCÍA, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.186.068, en nombre propio, en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, con el fin de que se le proteja su derecho fundamental de petición.

PETICIÓN Y FUNDAMENTOS

Para la protección del mencionado derecho, la accionante solicita:

- "1. Se ampare mi derecho fundamental de petición*
- 2. Se ordene a COLPENSIONES que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la Sentencia, profiera respuesta de fondo a mi petición relacionada con la decisión adoptada (por esa entidad) frente a la solicitud pensional presentada por mi persona y, además, comunique tal decisión al Ministerio del Trabajo con el fin de seguir llevando a cabo el trámite previsto en la ley 1112 de 2006."*

Las anteriores pretensiones se fundan en los hechos que se compendian así:

Manifestó el accionante que cuenta con 71 años y en la actualidad reside en la ciudad de Alicante, España; presentó ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social de ese país, solicitud para ser beneficiario del convenio aprobado por la Ley 1112 del 27 de diciembre de 2006.

ACCIÓN DE TUTELA - PRIMERA INSTANCIA

Indicó que en el año 2018 el Instituto Nacional de la Seguridad Social del país extranjero remitió un oficio que contenía el formulario ES/CO 02 al Ministerio de Trabajo de Colombia y esta última entidad lo devolvió en el año 2019, porque el documento no contenía ni firma ni sello, solicitando hacer las respectivas correcciones.

Señaló que la entidad de España, devolvió el documento debidamente diligenciado, adjuntando copia de su cédula de ciudadanía y el Ministerio de Trabajo lo remitió a Colpensiones el 20 de Octubre de 2020, bajo el número de radicado 08SE2020230100000033901.

Al no obtener respuesta, el 17 de septiembre de 2021, presentó derecho de petición ante Colpensiones a través de correo electrónico, manifestando su inconformidad por la demora de la entidad y fue hasta el 15 de octubre de 2021 que recibió respuesta de la cual se extrae "(...) es necesario estar a la espera de la respuesta"

Trascurriendo 7 meses y sin contar con una respuesta de fondo, presentó derechos de petición el 29 de junio y 31 de agosto de 2022, en la última fecha le reiteraron que debía estar a la espera de la respuesta.

Aduce el accionante, que no solamente se está vulnerando su derecho de petición, también a la seguridad social y mínimo vital, ya que no cuenta con ingresos adicionales y se encuentra desempleado.

TRÁMITE

Repartida la presente acción a este Despacho Judicial, mediante proveído de 14 de septiembre de 2022, notificado el día siguiente, se admitió y se ordenó comunicar a las entidades accionadas y vinculada MINISTERIO DE TRABAJO, la existencia del trámite; igualmente, se dispuso solicitarles que en el término de un (1) día se pronunciaran sobre los hechos de esta tutela y ejercieran su derecho de contradicción y defensa.

PROCESO No.: 10013103038-2022-00384 -00
ACCIONANTE: EDGAR AUGUSTO MORENO GARCÍA
ACCIONADO: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE
PENSIONES – COLPENSIONES

ACCIÓN DE TUTELA - PRIMERA INSTANCIA

CONTESTACION

MINISTERIO DE TRABAJO.: *Indicó que en virtud del Convenio previsto en la Ley 1112 de 2006, es un organismo de enlace, por lo que no le corresponde el trámite, estudio ni reconocimiento y/o pago de la pensión de vejez, tampoco los certificados de los tiempos cotizados.*

Procedió a describir el procedimiento que se debe efectuar para dar aplicación al convenio de seguridad social suscrito con el reino de España.

Respecto a la situación del accionante, refirió que mediante comunicación No. 08SE2020230100000033901 del 20 de Octubre de 2020, se le requirió a Colpensiones allegar copia del acto administrativo de reconocimiento o negación de la prestación y reiterando lo anterior, se le envió comunicación No. 08SE2022230100000034887 del 28 de julio de 2022.

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES.: *Únicamente informó quien es la persona encargada de dar cumplimiento a los fallos de Tutela junto a un certificado laboral.*

CONSIDERACIONES

De acuerdo con lo que refiere el presente expediente de tutela debe determinarse si la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, ha desconocido el derecho de petición del señor EDGAR AUGUSTO MORENO GARCÍA, al no atender la solicitud pensional que se le trasladó desde el 20 de Octubre de 2020, conforme lo establece el Convenio reglamentado en la Ley 1112 de 2006.

En atención a que el objeto de la presente acción es la protección del derecho fundamental de petición, resulta necesario realizar las siguientes precisiones.

El artículo 23 de la Constitución Nacional consagra el derecho de petición, desarrollado por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y en especial por la Ley 1755 de 2015 que sustituyó el Título II

ACCIÓN DE TUTELA - PRIMERA INSTANCIA

de la mencionada Codificación y que regulaba el citado derecho el cual se constituye en derecho fundamental de toda persona y en instrumento de comunicación entre las autoridades administrativas y los particulares.

Así el Derecho Petición permite que toda persona pueda elevar solicitudes respetuosas a las autoridades, sea en interés general o particular, y obtener pronta respuesta, lo que permite concluir, tal como lo sostuvo la Honorable Corte Constitucional (Sentencia C-542 de mayo 24 de 2005), que este derecho hace efectiva la democracia participativa, así como real la comunicación entre la administración y los particulares y conlleva no solo el poder realizar tales peticiones, sino el derecho a obtener una respuesta pronta, completa y de fondo.

Por tanto, frente al carácter de fundamental que le asiste al derecho de petición, y con el fin de preservar y garantizar su efectividad, ante la falta de atención de las autoridades a las solicitudes de los interesados, surge la posibilidad de acudir a la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Nacional conforme el Decreto 2591 de 1991.

Conforme lo expuesto el derecho de quien formule una solicitud en ejercicio del derecho de petición, no solo conlleva la posibilidad de dirigirse a la Administración sino además su pronta resolución, la cual, valga aclarar, no necesariamente tiene que ser favorable a las pretensiones del accionante, pero sí a que en caso de que no se acceda a lo pedido, se le indiquen las razones de tal determinación.

Tal como se indicó el derecho de petición se encuentra consagrado en artículo 23 de la Constitución Nacional y regulado en la Ley 1755 de 2015 cuyo artículo 14 estipuló el término con que cuenta la administración para responder las peticiones, así:

ARTÍCULO 14 Ley 1755 de 2015. *"Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:*

ACCIÓN DE TUTELA - PRIMERA INSTANCIA

En sentencia T-377 de 2000, la Corte Constitucional relacionó algunos supuestos mínimos de este derecho, así:

"a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de expresión.

b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido.

c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. oportunidad 2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. Ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición.

d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita.

e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto es, a quienes ejercen autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las organizaciones privadas cuando la ley así lo determine.

(...)

g). En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el término que tiene la administración para resolver las peticiones formuladas, por regla general, se acude al artículo 6º del Código Contencioso Administrativo que señala 15 días para resolver. De no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud. Cabe anotar que la Corte Constitucional ha confirmado las decisiones de los jueces de instancia que ordenan responder dentro del término de 15 días, en caso de no hacerlo, la respuesta será ordenada por el juez, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes. Sentencias T-294 de 1997 y T-457 de 1994."

Teniendo en cuenta que lo solicitado por el accionante es un asunto de carácter pensional, la Corte Constitucional en cuanto a los términos para su resolución indicó en Sentencia T-155 de 2018:

Por su parte, la Ley 1755 de 2015, que sustituyó el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en el artículo 14, dispone que "salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda

ACCIÓN DE TUTELA - PRIMERA INSTANCIA

petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción”.

34. Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia T-238 de 2017, sostuvo que “las autoridades ante las que se interponga una solicitud de carácter pensional, en principio, deben resolver la misma dentro de los quince días hábiles siguientes a su interposición. Salvo que se trate de una petición elevada ante la extinta Cajanal, ahora la UGPP, en cuyo caso el término para resolver es de 4 meses o que se refiera al trámite efectivo para el reconocimiento y pago de una mesada pensional, caso en el cual, la administradora de pensiones cuenta con 6 meses a partir del momento en que se radique la solicitud para realizar las diligencias necesarias tendientes al pago de la mesada”.

Conforme con las normas previamente señaladas y la jurisprudencia constitucional se tiene que:

(i) Dentro de los quince (15) días siguientes a la interposición de una solicitud pensional, la administradora debe informar al peticionario sobre el estado en el que se encuentra su trámite, las razones por las cuales ha demorado la respuesta y la fecha en la que responderá de fondo sus inquietudes.

(ii) Las solicitudes pensionales deben resolverse en un término no mayor a cuatro (4) meses, contados a partir de la presentación de la petición. *(Subrayado y negrilla fuera del texto original)*

(iii) Los fondos de pensiones cuentan con seis (6) meses, a partir de la solicitud, para adoptar todas las medidas necesarias que faciliten el pago efectivo de mesadas pensionales.

(iv) La entidad debe emitir un pronunciamiento de fondo, es decir, que las solicitudes se resuelvan materialmente y, además, notificarlas al peticionario.

35. En síntesis, todas las personas tienen derecho a presentar peticiones respetuosas a las entidades encargadas de reconocer prestaciones sociales y a recibir una respuesta en los términos establecidos por la ley y la jurisprudencia constitucional, esto es, a obtener respuesta oportuna y de fondo.

Con base en las anteriores consideraciones y reiterando la jurisprudencia de la Corte Constitucional, se procede a analizar el caso en estudio.

Dentro de los documentos aportados, se establece que el accionante ha realizado las actuaciones pertinentes para lograr el reconocimiento de su jubilación ante

PROCESO No.: 10013103038-2022-00384 -00
ACCIONANTE: EDGAR AUGUSTO MORENO GARCÍA
ACCIONADO: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE
PENSIONES - COLPENSIONES

ACCIÓN DE TUTELA - PRIMERA INSTANCIA

el Instituto Nacional de la Seguridad Social de Alicante, España, de conformidad con la Ley 1112 de 2006.

Lo anterior, también señala que dichas actuaciones han surgido desde el año 2018 y es hasta el año 2020, después de realizar las correcciones al Formulario ES/CO 02, donde el Ministerio de Trabajo le corre traslado de la documentación a Colpensiones bajo el radicado No. 08SE2020230100000033901 (Folio 15 escrito de tutela).

En este punto precisa el despacho, que no existe alguna actuación posterior al 20 de Octubre de 2020, por lo que el término de 4 meses se encuentra ampliamente superado para la fecha de interposición de la acción constitucional objeto de estudio, por tanto, se encuentra acreditado que se ha vulnerado el derecho fundamental de petición del accionante.

*En mérito de lo expuesto el **JUZGADO TREINTA Y OCHO CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,*

RESUELVE

PRIMERO: TUTELAR el derecho de petición del señor EDGAR AUGUSTO MORENO GARCÍA, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.186.068, el cual fue vulnerado por la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES**, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ORDENAR a la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES**, para que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente decisión resuelva de fondo el Oficio No. 08SE2020230100000033901 remitido por el Ministerio de Trabajo desde el 20 de Octubre de 2020.

TERCERO: ADVERTIR a la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES**, que deberá acreditar ante esta autoridad judicial el cumplimiento del presente fallo de tutela.

PROCESO No.: 10013103038-2022-00384 -00
ACCIONANTE: EDGAR AUGUSTO MORENO GARCÍA
ACCIONADO: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE
PENSIONES – COLPENSIONES

ACCIÓN DE TUTELA - PRIMERA INSTANCIA

CUARTO: ADVERTIR a los extremos de esta acción, que contra la presente determinación procede la impugnación, ante la Sala Civil del H. Tribunal Superior de este Bogotá D.C.

QUINTO: REMITIR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de que el fallo no sea impugnado; conforme a lo dispuesto por el artículo 31 de Decreto 2591 de 1991.

SEXTO: NOTIFICAR el presente fallo por el medio más expedito, de tal manera que asegure su cumplimiento, tal como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,



**CONSTANZA ALICIA PIÑEROS VARGAS
JUEZ**

DMR

Firmado Por:
Constanza Alicia Pineros Vargas
Juez Circuito
Juzgado De Circuito
Civil 038
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: 1c1177d0698c948e9291322e627e8b1e85099c665fe3ad430bff8ebbee0dfbe

Documento generado en 27/09/2022 09:41:20 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>